

El asesinato de Minerva: la batalla por el normalismo rural

Luis Hernández Navarro*

La ofensiva contra el normalismo rural enfrenta dos discursos educativos. Uno, impulsado por autoridades y empresarios, que reivindica la necesidad de la modernización y la calidad académica, definidos por fuera de la historia del normalismo; otro, que forma parte de la cultura normalista rural desde hace décadas, que retoma tradiciones pedagógicas de la Revolución Mexicana, como la Escuela Rural mexicana y la educación socialista, y que ve como misión de sus egresados el ayudar no sólo a la enseñanza de conocimientos tradicionales a campesinos e indígenas, sino a la organización para su liberación. También está en disputa el control de la vida interna de las escuelas entre funcionarios educativos, políticos locales y estudiantes; la actual burocracia educativa y los gobiernos estatales han tratado de recuperar, por todas las vías imaginables, el mando de estos centros escolares.

Algo huele a podrido en Dinamarca

Dos conflictos estudiantiles locales, de relativa fácil solución, se convirtieron en menos de un año en severos problemas políticos nacionales. Ambos fueron protagonizados por estudiantes de Normales rurales; en los dos casos, el uso desmedido de la fuerza pública provocó una grave violación a los derechos humanos de los jóvenes. El primero aconteció en Guerrero, con un gobernador de extracción perredista. El otro, en Michoacán, con un mandatario surgido de las filas priíistas.

* Investigador independiente y Coordinador de Opinión del diario *La Jornada*.

El 12 de diciembre de 2011 un bloqueo carretero en Chilpancingo, Guerrero, de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fue violentamente desalojado, provocando la muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y de Gabriel Echeverría de Jesús, alumnos del plantel. Una ola de indignación se levantó en todo el país. Poco más de tres meses después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la que se reconoce la legitimidad de la protesta y considera plenamente acreditada la existencia de las violaciones graves a derechos humanos, imputables a autoridades federales y estatales, como la criminalización de la protesta social, el uso irracional de la fuerza y el empleo excesivo de las armas de fuego.

La madrugada del 15 de octubre de 2012, el gobierno de Michoacán precipitó el desbordamiento popular cuando policías federales y estatales golpearon salvajemente y detuvieron a 176 estudiantes normalistas rurales de Tiripetío, Cherán y Arteaga.

Los jóvenes exigían el diálogo con el gobernador para presentar una propuesta de mejora educativa de las Normales del estado, suspender la imposición de un plan de estudios que no fue consultado con la comunidad y ampliar las plazas docentes. Nunca tuvieron respuesta real de las autoridades. Por el contrario, el gobernador Fausto Vallejo dijo que no iba a negociar bajo presión. Finalmente, una inusitada movilización social obligó al gobierno local a liberar a los jóvenes.

Entre uno y otro problema se produjeron diversas protestas en otras escuelas del mismo sistema, que quedaron circunscritas al ámbito local. En agosto de este año, la policía entró a la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, de Canatlán, Durango, detuvo a dos estudiantes y los torturó para que dijeran quién era su dirigente.

Desde noviembre de 2011, profesores y trabajadores apoyados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) unieron fuerzas para lograr la destitución del cuerpo directivo de la Normal Rural de Panotla, Tlaxcala, a cargo de Victoria Ramírez. La presión obligó a suspender la culminación del semestre y el inicio del nuevo. En el mes de marzo, las estudiantes tomaron el plantel.

Las agresiones a los normalistas rurales se produjeron en medio de una fuerte campaña nacional denigratoria hacia ellos y sus escuelas, de una agresiva ofensiva de la derecha empresarial en contra de la educación pública y los maestros, de una nueva reforma a las Normales impulsada por las autoridades educativas, de la justificada percepción estudiantil de que se pretende cerrar sus centros escolares, y de la alerta y la movilización para evitarlo.

En marzo de 2012, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) denunció:

En la Normal de Panotla, Tlaxcala, por ejemplo, hubo hostigamiento por parte de la policía estatal alrededor de la escuela en donde impedían que se realizaran las actividades que se tenían en solidaridad con la Normal de Ayotzinapa. En esta escuela las alumnas se han visto condicionadas por los directivos, principalmente por maestros de la planta docente, que no permitan [sic] que las alumnas salgan. Les exigen a diario en las aulas que no tengan participación en la lucha estudiantil. Teteles, Puebla, se ve amenazada seriamente por los grupos empresariales del estado, en donde sale a la luz el comentario de que se pretende cerrar la escuela. Mactumatza [sic] también se ve atacada por el gobierno del estado de Chiapas, así mismo Hecelchakan, Campeche. La mayoría de las normales están luchando dentro de su mismo estado, por la intención clara de transformarlas o desaparecerlas. (Cit. por Buendía, 14 de marzo de 2012)

Las agresiones al normalismo rural no son nuevas. Como lo recuerda Iván García Solís:

Los ataques gubernamentales contra las normales rurales se iniciaron justamente en la de Ayotzinapa el 2 de abril [...] de 1941 por Manuel Ávila Camacho [...] y Luis

Sánchez Pontón, su secretario de Educación. [La administración avilacamachista acusó a los jóvenes de] “faltas a la autoridad y ultrajes a la bandera nacional”, inculpando falsamente a los normalistas de haber sustituido el lábaro patrio por la bandera rojinegra de su huelga estudiantil. Numerosos alumnos fueron detenidos y acusados de “asociación delictuosa”, “delitos contra la autoridad” y “ultrajes a la bandera”. Las autoridades democráticas [...] fueron cesadas y hostilizadas. Se suprimió el consejo técnico, instrumento democrático, y se impuso la separación de las escuelas regionales campesinas de las normales rurales, mutilando así un modelo educativo popular y avanzado. (García, 18 de diciembre de 2011)

Sin embargo, aunque los ataques en su contra no son nuevos, lo que sobresale en los últimos años es que éstos han alcanzado una intensidad no vista desde que Gustavo Díaz Ordaz cerró más de la mitad de ellas para convertirlas en escuelas técnicas agropecuarias y se eliminó la enseñanza secundaria a su interior. De más de una treintena de centros escolares que existían en aquellos años, subsistieron 17. Lo que sí es inédito es el grado de apoyo popular que estas escuelas cosecharon en Ayotzinapa y Michoacán.

La ofensiva contra el normalismo rural enfrenta dos discursos educativos. Uno, impulsado por autoridades y empresarios, que reivindica la necesidad de la modernización y la calidad académica, definidos por fuera de la historia del normalismo; otro, que forma parte de la cultura normalista rural desde hace décadas, que retoma tradiciones pedagógicas de la Revolución Mexicana, como la Escuela Rural mexicana y la educación socialista, y que ve como misión de sus egresados ayudar no sólo a la enseñanza de conocimientos tradicionales a campesinos e indígenas, sino a la organización para su liberación.

También está en disputa el control de la vida interna de las escuelas, entre funcionarios educativos, políticos locales y estudiantes. Desde la década de los 30 del siglo pasado, muchos aspectos de la vida interna de la mayoría de las Normales rurales están controlados, en los hechos, por los alumnos, y no por los directivos de la institución. Esta situación le parece inadmisibles a la actual burocracia educativa y a los gobiernos estatales, que han tratado de recuperar, por todas las vías imaginables, el mando de estos centros escolares.

Finalmente, confronta dos lógicas de negociación. La promovida por mandatarios locales y funcionarios educativos, que rechaza la presión de los estudiantes, objeta sus formas de protesta y aspira a que los jóvenes se plieguen

sin más a sus directrices y reformas; y la de las escuelas adheridas desde 1935 a la organización estudiantil más antigua de México, la FECSM, que promueve desde hace décadas la movilización social, la acción directa y la vinculación con el pueblo.

El degenerado normalismo rural

Existe una sistemática campaña de satanización hacia las Normales rurales, sus estudiantes y sus egresados. Académicos y periodistas, políticos y líderes sindicales, funcionarios públicos y empresarios se han empeñado en presentarlas como una bestia negra pedagógica, un cáncer que es necesario extirpar del tejido educativo nacional.

La ofensiva no es nueva, pero desde hace unos años ha resurgido con vigor. Como escribió la investigadora Tanalís Padilla:

El 7 de diciembre de 1941 el periódico *Novedades* destacó un reporte que caracterizaba a la educación rural como un fracaso y culpaba a los maestros de haberla “convertido en un campo de Agramante, donde la agitación, el delito y la ‘basura’ social han encontrado refugio”. Aunque el artículo señala que el estudio fue hecho por pedagogos, el reporte tiene aire de diatriba: “Las escuelas se abandonaron —señala— porque los maestros, más que a enseñar, se dedicaron, unos a pelear; otros, a defenderse; los terceros, a hacer propaganda en favor de su ideología, y los últimos, a holgar”. (Padilla, 28 de enero de 2012)

En pleno delirio anticomunista, a partir de la década de los 60 comenzaron a ser descritas como “nidos de comunistas”, “kínderes bolcheviques”, “semilleros de guerrilleros”, “centros de vicios”, “santuarios de rojillos”, “guaridas de malvivientes” y lindezas por el estilo.

La desproporción entre las acusaciones en su contra y su presencia social no podía ser más grande. Según un informe de la Subsecretaría de Educación Superior, la educación normal rural se imparte en 16 estados, tiene una matrícula de seis mil 990 alumnos, de los cuales 3 mil 750 son mujeres y 3 mil 240 son hombres.

En los últimos años, la ofensiva mediática contra la “amenaza normalista” se renueva cada vez que los jóvenes que estudian en estos centros escolares se movilizan en sus estados demandando cosas tan sencillas como el aumento de la matrícula escolar, el mejoramiento de las instalaciones donde viven y estudian y su oposición a reformas que consideran lesivas. Ejemplos de esta campaña abundan.

En octubre de 2003, Raúl González Apaolaza, entonces secretario de Educación de Hidalgo, defendió el cierre de la Normal Rural El Mexe, fundada 77 años atrás, porque su sistema provocaba la “degeneración” de la juventud, era centro de propagación de enfermedades venéreas y lugar en el que se violaba a estudiantes y se practicaban abortos (Herrera & Camacho, 30 de octubre de 2003). Estos argumentos son idénticos a los que se utilizaron a principios de los 40 para eliminar la coeducación en las Normales rurales y atacar a quienes defendían la educación socialista.

Entrevistado por Claudia Herrera y Carlos Camacho, el funcionario educativo consideró que el normalismo rural no existía; dijo a los reporteros que en su momento cumplió las expectativas: formó profesores destacados y muy queridos en las comunidades. “Pero eso ha cambiado: las escuelas llevan el nombre, pero los planes de estudio son de cualquier normal; los alumnos no tienen conocimientos de producción agropecuaria y tampoco hay plazas especiales para ellos”, indicó. Para él, lo que realmente existía era una degeneración del normalismo rural:

Los alumnos de El Mexe asisten a clase uno de cada tres días. Ningún director quiere que trabajen en sus escuelas, porque son irresponsables [...] No estoy en contra del normalismo rural; mi formación es politécnica y viene de la educación socialista y todo eso, pero estoy en contra del desorden. El Politécnico pasó por una época así en 1959 y cerró el internado. Gracias a eso, en los sesenta se convirtió en una extraordinaria institución. (Cit. por Herrera & Camacho, 30 de octubre de 2003)

Para él, los internados en los que viven los hijos de campesinos que asisten a esas instituciones educativas son fuente de mal. “No estoy de acuerdo con los internados. Muchas de las razones de la degeneración que hay en los jóvenes, no hablo de degeneración sexual, sino de actitudes, es por los internados. Los internados se hicieron para jóvenes que salían de la secundaria, que tenían 14 o 15 años. Pero ahora estos muchachos tienen 24 o 25”. De acuerdo con González Apaolaza, el cierre de las Normales rurales es una política nacional; aseguró que la Secretaría de Educación Pública (SEP) pretendía reformar el sistema de educación Normal en México, pero “nadie está proponiendo que regresemos al normalismo rural”, por dos razones: el decrecimiento de la población rural y la solución del problema del magisterio en todo el país (Herrera & Camacho, 30 de octubre de 2003).

Entrevistado por la revista *Contralínea*, Flavio Campos Miramontes, titular de la Secretaría de Educación y Cultura de Zacatecas –entidad entonces gobernada por el Partido de la Revolución Democrática–, dijo que el modelo educativo y asistencial de las Escuelas Normales Rurales de todo el país era caduco, ya que “ahora todos se quieren salir del campo, se quieren urbanizar” (cit. por Ramírez, 15 de abril de 2008). La FECSM, aseguró el ingeniero químico,

es el mayor problema en la normal de San Marcos: los muchachos luchan permanentemente para que su organización imponga reglas con repercusión académica [...] Es un cuento sin fin porque su filosofía es generar privacidad para ausentarse, presentar posteriormente exámenes o presionar por calificaciones por el simple hecho de pertenecer a este órgano, lo que ha provocado un largo debate con los muchachos, porque les hemos dicho que no produce valores como el de la legalidad y el respeto a los demás. [Según él], este tipo de normalismo debería tener una reducción. (Cit. por Ramírez, 15 de abril de 2008)

Estaba aún fresca la matanza de estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, cuando en su primera plana del 19 de enero de 2012 el periódico *El Universal* publicó una nota titulada “Impera en normales poder de alumnos. Domina autoritarismo, alerta; estudiantes incurrir en delitos”. Según el citado diario, en un informe que la SEP entregó al Congreso de la Unión se advierte que en las 17 escuelas Normales rurales se cometen delitos durante conflictos estatales o nacionales, tienen bajo rendimiento académico y prácticas poco democráticas. Entre los delitos que se dice cometen los alumnos se encuentran la toma de instalaciones, saqueos a establecimientos, pintas, cierres de carreteras, quema de vehículos, secuestros y agresiones (Arvizu, 19 de enero de 2012). De acuerdo con la nota, la SEP considera que estas instituciones educativas tienen el problema de incumplimiento de calendarios escolares, horarios de trabajo, asistencia, exámenes y acreditaciones, lo que repercute en el bajo rendimiento escolar.

En la cruzada contra las Normales rurales, Elba Esther Gordillo ha puesto algo más que un granito de arena. Durante la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2008-2009, vestida con un elegante traje sastre gris, en compañía del presidente Felipe Calderón y de la entonces secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, la líder vitalicia del SNTE, en su fantasía de hacer del país un gran centro vacacional, llamó a desaparecer el normalismo público. “Queremos que las normales sean instituciones para téc-

nicos en turismo, técnicos en actividades productivas”, dijo. Justificó su propuesta argumentando que se debe evitar que haya “tantos docentes como manejadores de carro y servidores de mesa”. Dijo que “el sistema de normales ha sufrido un quiebre” y por ello la SEP debía buscar “vocaciones más cercanas al empleo, en lugar de las licenciaturas de pedagogía”. Finalizó diciéndole a Felipe Calderón: “¡Feliz cumpleaños, señor Presidente!” (Avilés & Herrera, 19 de agosto 2008).

El 5 de agosto de 2010, la señora Gordillo volvió a la carga. Al participar en el seminario “La nueva sociedad. Una nueva educación y una nueva política”, afirmó: “Hemos planteado muchas veces a las autoridades que si se cierran algunas de las normales rurales va haber mucho alboroto de los jóvenes. No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, pero si no hacemos esto van a seguir con lo mismo” (cit. por Poy, 6 de agosto de 2010: 35).

Casi un año después, durante el Quinto Congreso Nacional de Educación, realizado en junio de 2011 en el Centro Cultural del México Contemporáneo, la líder vitalicia del SNTE volvió a la carga: “¿Qué haremos con tantas normales, ya no *patitos*, con tantos monstruos de normales?” –inquirió. Allí mismo, la derecha empresarial demostró que camina de la mano de *La Maestra*. Claudio X. González, en su doble papel de presidente de la Fundación Televisa y del organismo empresarial *Mexicanos Primero*, demandó cerrar las escuelas formadoras de docentes porque “hay muchas muy mediocres y unas que son un hervidero de política y de *grilla* [...] ¿Cuándo nos vamos a atrever a cerrar y a meter la lana a las que van a preparar a los maestros del futuro de nuestro país?” Y se respondió: “Se va a requerir de mucha voluntad y de mucho valor y de que nos aguantemos la turbulencia porque sin turbulencia no hay cambio” (cit. por Avilés, 23 de junio de 2011: 42).

El asesinato de Minerva

Una enorme escultura de Minerva, la diosa de la sabiduría, las artes y las técnicas de la guerra en la mitología romana, adorna el patio del edificio de la Escuela Normal de la Independencia, en el Estado de México. Mide cinco metros de alto por tres de ancho; en la mano derecha sostiene una bandera y en la izquierda la antorcha del conocimiento. No es casualidad: Minerva es, también, la deidad tutelar del normalismo.

Pero, a pesar de su peso simbólico en la educación nacional, la vida de Minerva corre peligro. La afrenta no es poca cosa. Los disparos a muerte que le ha dirigido la señora

Gordillo, tampoco: se trata de una institución central en el sistema educativo nacional. Las escuelas Normales han sido las responsables de la formación de los profesores de educación básica desde el siglo XIX. La educación pública es impensable sin el normalismo, de manera que atacarlo es otra agresión contra la educación pública. Más aun cuando hay evidencias sólidas de que faltan docentes en muchas escuelas.

La inmensa mayoría de los maestros de educación básica que se encuentran en servicio se reconocen normalistas. El normalismo es su identidad y motivo de orgullo. En esta institución se resumen algunas de las mejores tradiciones del trabajo del magisterio nacional. Llamar a su desaparición es una provocación descomunal.

Es, además, una actividad preponderantemente femenina: 68% de los estudiantes de escuelas Normales son mujeres. En las licenciaturas de educación preescolar, primaria, secundaria y especial, el porcentaje del alumnado femenino es aun mayor. Sólo en la licenciatura de educación física hay una proporción mayor de varones. Eliminar el normalismo es una forma muy peculiar de “defender” la causa de las mujeres.

El asalto contra el normalismo se efectúa, irónicamente, cuando su ciclo de crecimiento ha disminuido. Su *boom* se vivió hace más de 30 años. Durante la década de los 70 la matrícula de educación normal creció significativamente. En apenas una década se multiplicó casi tres veces. En 1980 alcanzó 332 mil estudiantes, la cifra más alta en la historia.

A partir de esa fecha la matrícula descendió, presionada por los sistemas de educación abierta, el fortalecimiento de las escuelas técnicas, la fundación de la Universidad Pedagógica, el cierre de Normales rurales y la creación del bachillerato pedagógico, que elevó a siete años el tiempo de formación de un profesor de primaria. Al comienzo de los años 90, la matrícula llegó a 109 mil estudiantes, esto es, una cantidad 67% menor a la de una década antes.

El normalismo ha sufrido importantes cambios internos. En los últimos 39 años han tenido siete reformas curriculares. En promedio, una cada cinco años. Ninguna se ha preocupado seriamente por resolver los graves problemas de infraestructura que sus instalaciones tienen. En más de una, el Banco Mundial ha metido seriamente la mano.

Aunque Elba Esther Gordillo y Claudio X. González proponen cerrar las Normales públicas, guardan silencio sobre el destino de las privadas. En 2003 había en México 457 escuelas Normales; 60% eran públicas y 40%, privadas. En ellas se atendía a 169 mil alumnos. No es infrecuente que muchos de los dueños de las Normales particulares sean dirigentes sindicales aliados de Gordillo. Se trata de un mag-

nífico negocio nacido de las relaciones de complicidad que mantienen con las autoridades educativas y que se complementa por su capacidad para ofrecer plazas como docentes a los egresados de sus instituciones escolares. De paso, la burocracia sindical ha considerado a las escuelas Normales públicas y a las dependencias educativas encargadas de su administración como parte de su cuota de poder.

En los últimos años se ha levantado una fuerte crítica a la forma en que se contrata a los egresados de las Normales. Pero la crítica olvida convenientemente el papel desempeñado por las autoridades educativas. Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la asignación de las nuevas plazas docentes en 2003 era decidida exclusivamente por la autoridad educativa en 11 estados, en tres dependía enteramente de la sección sindical y en 18 entidades federativas se repartía a partes iguales. En 13 estados existían mecanismos de elección y en 19 no se aplicaba ninguno.

Al pedir *la muerte de Minerva*, se ha perpetrado una nueva afrenta contra el magisterio nacional. La defensa del normalismo no es una nostalgia antimoderna. En él se resume el *ethos* gremial. Esa forma de ser de los maestros de base ha sido desafiada. Y de ese desafío difícilmente saldrá impune.

Contra la educación pública

La ofensiva en contra del normalismo en general y del normalismo rural en particular es tan sólo la punta del iceberg del ataque de la derecha empresarial en contra de la educación pública y los maestros. Animada por las campañas electorales y el rechazo de los docentes a la evaluación universal, las agresiones han subido de tono e intensidad en los últimos meses.

La propaganda empresarial presenta a los docentes como seres egoístas que tienen secuestrada a la niñez, como vagos irresponsables que frenan el desarrollo del país, como trabajadores privilegiados que devengan grandes sueldos sin merecerlo, como empleados que se niegan a ser evaluados.

Es una campaña en la que sus patrocinadores han gastado una verdadera fortuna. Está presente en el cine, la radio, la televisión, la prensa escrita, en letreros de los *parabuses* y en promocionales en los costados del transporte colectivo de varias ciudades del país. Líderes empresariales, locutores, intelectuales mediáticos y periodistas son su cara pública.

Su mensaje central es que el país está rezagado porque tiene una educación pública mediocre. Parte de los falsos supuestos de que el futuro económico de México depende

exclusivamente de la calidad de las escuelas y que el avance educativo de los alumnos es responsabilidad única de los maestros. Este argumento convierte a los profesores en los culpables de lo que sucede en el país. Ignora que la educación es resultado no sólo de lo que acontece en las aulas, sino de lo que se vive en la familia y la sociedad. Oculta que la grave problemática que se vive en México está directamente vinculada a un modelo de desarrollo del que ellos han sido beneficiarios directos, incapaz de generar crecimiento, empleo y bienestar, y a un régimen político de rasgos autoritarios y oligárquicos.

El discurso de la derecha empresarial sostiene que el sistema escolar debe actuar de la misma manera en que funcionan las operaciones de las empresas privadas. Los maestros –según esta lógica– deben estar controlados y rendir cuentas sobre la base de exámenes estandarizados, cuyos resultados deben servir para premiar a los docentes con estímulos económicos si los resultados son buenos o castigarlos con el despido si son malos.

El motor de la campaña de satanización es la organización Mexicanos Primero, que oculta su naturaleza de grupo de presión de la derecha empresarial presentándose como parte de la sociedad civil. Su presidente, Claudio X. González, fue, hasta hace muy poco tiempo, presidente de la Fundación Televisa. Su fundador, Alejandro Ramírez Magaña, es parte de la influyente familia dueña de la Organización Ramírez-Cinépolis. En su patronato participan algunos de los hombres más ricos de México.

Ni siquiera el deporte profesional ha quedado al margen de esta campaña. En un partido de la ligilla de fútbol, los jugadores del equipo Monarcas, de Morelia, saltaron al campo de juego con playeras blancas con la imagen de una mano mostrando una tarjeta roja, que los árbitros usan para expulsar a los deportistas que cometen graves infracciones, y la leyenda “A los malos maestros”. TV Azteca es la propietaria del club.

En plena campaña presidencial de 2012 comenzó a proyectarse en las salas de Cinépolis el panfleto fílmico *De panzazo*, instrumento principal de intervención pública de Mexicanos Primero en la coyuntura. La película diagnostica que la educación en México es un fracaso y responsabiliza de ello a los maestros. El documental es una copia del filme *Waiting for Superman*, dirigida por David Guggenheim, apoyada por el multimillonario Bill Gates y promovida por los conservadores estadounidenses para cuestionar la educación pública, a los profesores y a sus sindicatos.

De *panzazo* se convirtió en instrumento de presión para tratar de fijar la agenda educativa de la campaña

electoral y del futuro gobierno. Durante los últimos años, ninguna película, nacional o extranjera, ha sido tan publicitada como ésta en la vía pública. Incluso se ha organizado una exhibición en Estados Unidos.

De manera deshonesto y tramposa, utilizando su exhibición, Mexicanos Primero trató de sumar al público cautivo que asistió a la proyección del filme a sus tesis educativas. Inmediatamente después, en plena protesta contra la evaluación universal, publicó desplegados en periódicos nacionales defendiendo su propuesta político-educativa, como si se tratara de exigencias ciudadanas por una nueva enseñanza. Sin ninguna transparencia, la organización empresarial utilizó el anzuelo del entretenimiento como vía para la presión política y escondió su agenda detrás de una supuesta demanda cívica.

La agenda político-educativa de Mexicanos Primero ha tenido gran eco en los espacios informativos de Televisa. Los maestros agraviados no han encontrado allí derecho de réplica. Ni siquiera se les ha preguntado su opinión. Por supuesto, el “Canal de las Estrellas” no ha promovido un solo debate sobre el tema en el que participen los directamente involucrados. Lo que ha difundido es el monólogo de quienes denuestan a los profesores.

Faltando a la verdad, los intelectuales mediáticos han declarado, una y otra vez, que los maestros se niegan a ser evaluados, cuando lo que rechazan es una forma específica de evaluación que no se les consultó y que es ineficaz para mejorar la calidad de la enseñanza. Ellos saben que lo que las autoridades educativas pretenden con la llamada evaluación universal es acabar con conquistas laborales y abrir la puerta al despido. Demandan, además, que la evaluación sea para todos, docentes y autoridades.

La campaña de Mexicanos Primero agravia a los profesores y agrede a la educación pública. Esta ofensiva ha golpeado también a Elba Esther Gordillo. Sin embargo, en lugar de defender al gremio en su conjunto y a la educación pública, ella apostó por convertirse en una estrella más del “Canal de las Estrellas”. En agosto de 2012, en horario estelar, la cadena televisiva transmitió un anuncio comercial patrocinado por la líder vitalicia del magisterio nacional, en contra de los maestros democráticos.

En el promocional aparece un viejo pizarrón de color verde con un encabezado escrito con gis blanco que pregunta “¿quién es quién?”, dividido por una raya vertical que separa los buenos de los malos. Los héroes son, por supuesto, los del SNTE, los malvados son los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A lo largo de 30 segundos, una voz de mujer *en off* va leyendo los atributos de los primeros y los defectos de

los segundos, mientras una mano invisible de impecable caligrafía los anota de uno y otro lado de la pizarra. Los del SNTE —dice la publicidad pagada— “somos los maestros que sí queremos un México mejor”. Los de la CNTE son los maestros que quieren violentar a México. Para concluir, el libelo televisivo de Elba Esther Gordillo llama a que los televidentes no se confundan, muestra el logotipo del sindicato en la parte superior del pizarrón, y sentencia: “El SNTE: los maestros que sí queremos cambiar a México”.

La campaña mediática de la señora Gordillo es un botón de muestra de cómo se las gasta en el trato con la disidencia de su sindicato. El promocional está lleno de mentiras y omisiones. Los integrantes de la CNTE también son miembros del SNTE, sólo que no están de acuerdo con ella. Es más, han elaborado una enorme cantidad de propuestas educativas alternas. Tampoco se menciona que la líder vitalicia tiene a su disposición política un ejército de más de 20 mil aviadores que no pisan un salón de clases, cobran regularmente su sueldo y trabajan como *mapaches* electorales.

El mensaje es parte del matrimonio de conveniencia existente entre Elba Esther y Emilio Azcárraga. Tiene tras de sí una millonaria historia. En junio de 2009, el SNTE y Televisa firmaron un convenio por 150 millones de pesos para difundir un conjunto de *infomerciales* disfrazados de programa de concursos titulado *Todo mundo cree que sabe*, que resultó un gran fracaso.

Pero la ofensiva contra el magisterio democrático proviene, también, de la misma televisora. En distintos días, en horario estelar, el Canal 2 proyectó como muestra del cine mexicano contemporáneo el panfleto filmico *De panzazo*, en el que se denigra a los maestros y a la educación pública en el país.

El clima de linchamiento hacia el magisterio democrático impulsado por Elba Esther y la derecha empresarial tiene entre sus “clientes” favoritos a las Normales rurales. Sobre ellas se han cebado. La explosiva respuesta de los estudiantes de estos centros escolares en los últimos meses no es ajena a la campaña de odio que en su contra se ha levantado.

Jóvenes de carne y hueso

Los alumnos de las Normales rurales estudian en condiciones muy precarias. Permanentemente están amenazados con la reducción de la matrícula y con la incertidumbre laboral al concluir sus estudios. Al ingresar viven internados en las escuelas en instalaciones que usualmente carecen del mantenimiento adecuado, con becas que no siempre garantizan una alimentación adecuada.

Ello provoca que sus demandas sean muy parecidas:

rechazo a la disminución de la matrícula, preservación del sistema de internado, fortalecimiento de la vida académica y de las condiciones de estudio, mantener su sistema de trabajo-estudio, mejoramiento de la infraestructura y equipamiento escolar, dormitorios, servicios sanitarios y comedores dignos, aumento a la beca alimentaria para no seguir padeciendo el hambre de siempre y dotación de plazas de trabajo docente para los maestros egresados de sus escuelas, entre otras. (Navarro, 27 de diciembre de 2011)

Muchas de estas demandas son tan añejas como las mismas Normales rurales. Arturo Cano señala que desde los años 50, según recuerdan viejos profesores, la FECSM

exigía aumentar el cupo de las escuelas para dar cabida a algunos de los *gaviotas*, muchachos que sin estar inscritos asistían de oyentes a las clases con la esperanza de que pasado un tiempo les dieran un lugar. Les llamaban *gaviotas* porque sólo entraban al comedor cuando los alumnos regulares terminaban. A comerse lo que había sobrado, claro. (Cano & Ocampo, 17 de diciembre de 2011: 36)

La otra demanda antigua es el aumento de la cuota para comida. La exigencia de la FECSM era que se les pusiera al parejo del Colegio Militar, porque decían que los caballos del Ejército comían mejor que ellos. Una petición más reciente —cuenta Arturo Cano— tiene que ver con el adelgazamiento demográfico, según las autoridades, y con la intención de desaparecer las escuelas, según los normalistas. Los estudiantes exigen tener una plaza segura al egresar y las autoridades dicen que esos tiempos pasaron.

Pero, más allá de estas demandas particulares, los normalistas rurales exigen la sobrevivencia de su sistema educativo ante la constante intención oficial de desaparecerlas. Según la FECSM,

la hostilidad de las autoridades hacia las normales es en el sentido político, ya que estas escuelas albergan entre sus paredes ideas educativas, progresistas y revolucionarias que van totalmente en contra de los criterios capitalistas del gobierno. A partir de esta contradicción ideológica, el gobierno mandatado por los grandes organismos internacionales ha implementado una postura totalmente represiva y sin capacidad de diálogo con los normalistas. (“Las reformas educativas...”)

Las Normales rurales son una de las pocas vías de ascenso social que tienen los jóvenes en el mundo campesino. Los estudiantes que asisten a ellas provienen de familias de muy pocos recursos. La contradicción entre escasez de medios materiales para educarse y subsistir, pujanza juvenil y espíritu de superación provoca que dentro de estas instituciones prosperen actitudes y posiciones políticas radicales.

Las expectativas de movilidad social no son solamente un hecho individual, sino que involucran a las familias de los estudiantes y, con frecuencia, a sus poblados de origen. El destino que tengan los muchachos con sus estudios afecta la vida de sus comunidades. Lo que sucede en esas escuelas no es un hecho ajeno a las comunidades.

Como señala César Navarro:

Las escuelas normales rurales surgieron para dar educación a los más pobres, en primer término a los jóvenes provenientes de ejidos, comunidades indígenas e hijos de maestros. El derecho y el acceso a la educación sólo pudieron hacerse efectivos para amplios sectores de la población a partir de su creación y fueron concebidas para preparar y dotar de profesores a la escuela primaria rural en expansión. Por ello, han sido parte esencial en la historia de la educación pública mexicana. La multiplicación y fortalecimiento del normalismo rural se produjo al unísono con la renovación de las luchas agrarias que conquistaron la tierra para decenas de miles campesinos e hicieron posible la fundación de escuelas públicas por todo el territorio nacional. Tierra y educación constituyen los fundamentos originarios que dieron sentido a la existencia de las normales rurales desde los años del cardenismo. (Navarro, 27 de diciembre de 2011)

Pero más allá del estereotipo del normalista rural como un “facineroso”, que se difunde en los medios masivos de comunicación, los estudiantes de esas instituciones son jóvenes comunes y corrientes. Ése es el caso de Gabriel Echeverría de Jesús y de Jorge Alexis Herrera Pino, los estudiantes de Ayotzinapa asesinados por la policía el 12 de diciembre de 2011. Ambos aspiraban a ser licenciados en Educación Primaria.

Gabriel nació en el municipio de Tixtla, en Guerrero. Fue hijo de una madre bilingüe que tuvo cuatro hijos, que no sabía leer ni escribir y que se gana la vida con una pequeña fonda. Su padre es campesino, pero no puede trabajar porque padece una afección cerebral. Dos de sus hermanos tuvieron que emigrar a Estados Unidos como trabajadores indocumentados. El menor dejó la escuela regular por falta de dinero y estudia la preparatoria abierta.

Gabriel trabajaba esporádicamente de peón para apoyar a su familia, con frecuencia lo hacía toda la noche. Era un muchacho serio y responsable. Planeaba estudiar otra carrera al terminar la Normal y ayudar económicamente a su familia. La última vez que habló con su papá, le dijo: “Yo quiero ser lo que fue Benito Juárez”. Le gustaba la danza folklórica. Ocupaba la cartera de Orientación política del Comité Ejecutivo de la sociedad de alumnos Ricardo Flores Magón. Era representante de Ayotzinapa ante el resto de las Normales del país. Su nombramiento –aseguraba– era una gran responsabilidad. Su madre le dijo a Arturo Cano: “Mi hijo no era asesino, no era violador, nomás fue a una escuela de pobres” (Cano, 18 de diciembre de 2011: 2).

Jorge Alexis Herrera nació en el municipio de Atoyac. Su padre, Jorge, es campesino que siembra dos hectáreas de maíz y frijol y maneja una combi. Su madre, Elizabeth, vende quesadillas y tacos en su casa. Jorge estudiaba el tercer año de Normal. Era alto y delgado. Excelente deportista, le gustaba jugar basquetbol. Cada mañana y cada tarde salía a correr para hacer condición física. Los fines de semana los pasaba con su novia Anel, maestra de telesecundaria, que viajaba seis horas para encontrarse con él. Comenzaron su noviazgo en segundo de preparatoria. Era alegre, quería ser maestro como sus tíos y primos y casarse pronto. Ella se quedó con su regalo de Navidad: unos tenis de buena calidad (Cano, 18 de diciembre de 2011: 2).

El ataque al campo y las reformas a las Normales

El abandono al que se ha sentenciado a las Normales rurales y la presión para que abandonen su misión original de promover la enseñanza en el mundo campesino van de la mano de las políticas anticampesinos y antiagrícolas echadas a caminar en el país a partir de 1983.

Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, los gobiernos priístas impulsaron un conjunto de políticas con un fuerte sesgo antiagrícola. Desde 1982 la inversión pública destinada al campo disminuyó de manera sostenida. Se privilegió la importación de alimentos por sobre el estímulo a la producción nacional. Se abrieron las fronteras indiscriminadamente, sin gradualidad, sin reconversión productiva y casi sin compensaciones. Se concentraron los recursos en el apoyo a los grandes agricultores de exportación. Se intentó meter al mercado las tierras que se encuentran en manos del sector social. Se buscó, deliberadamente, drenar la población rural e impulsar una agricultura sin campesinos.

El resultado de estas políticas fue una caída generalizada en la rentabilidad del sector agropecuario, la disminución del ingreso campesino, el incremento de la pobreza rural y el aumento de la migración. Ante la disyuntiva de optar entre las ventajas comparativas y la soberanía alimentaria, el país se quedó sin las dos.

En lugar de modificar esta orientación, los gobiernos del Partido Acción Nacional (2000-2012) las ratificaron y profundizaron. Las administraciones panistas desmantelaron una parte muy importante de los programas de soporte al campo sin contar con nuevas instituciones. Al frente de la política agropecuaria colocaron a los enemigos históricos de los campesinos: los adversarios de ejidos y comunidades. Durante décadas les han disputado la tierra, el territorio, los recursos naturales y los beneficios de las políticas públicas. Su pretensión de convertirlos –al margen de su opinión, deseo o viabilidad– en “empresarios” tiene un fin: desaparecerlos.

Esta sentencia de muerte hacia el campo y los campesinos ha sido, también, una condena contra las escuelas que deberían proporcionar educación allí. Las reformas más amplias que se han hecho a la educación Normal han agravado más el problema.

Durante los últimos 50 años, señala Etelvina Sandoval (2011), las autoridades han llevado a cabo ocho cambios de planes y programas, pero en ningún caso han logrado ponderar la experiencia específica de muchas Normales, el peso de su contexto histórico social regional. Además, han predominado las presiones políticas a la hora de evaluar lo realizado y proponer los nuevos cambios.

Con la reciente reorganización orgánica de la SEP por niveles educativos, la dirección correspondiente a la educación Normal pasó de la Subsecretaría de Educación Básica a la de Educación Superior (dado que otorga el nivel de licenciatura). Escribió Manuel Gil Antón:

Con miopía, se cortó el lazo de las escuelas del magisterio con la entidad reguladora de sus labores, y pasaron a ser en cierto modo parias entre los verdaderos “superiores”: los licenciados y doctores. No se valoran y se desprecia (al menos descuida) a sus profesores y estudiantes. A veces, es vil clasismo. Vaya un dato: en el balance que hace la subsecretaría del sexenio, de 52 páginas, dos están dedicadas a este sector. Una es el título de la sección. (Gil, 16 de octubre 2012)

Lejos de solucionar los problemas educativos del país, muchas de estas reformas los han agravado. Éste es el caso de la última reforma curricular a la educación

Normal, promovida desde 2009 por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE). Su diseño se realizó sin participación directa de la comunidad escolar.

La situación ha sido denunciada por los normalistas. En una carta abierta dirigida a la maestra Marcela Santillán, directora general de la DGESPE, la comunidad de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM) señaló que “el proceso curricular desarrollado, hasta ahora, por la DGESPE se ha caracterizado por la falta de transparencia, la desorganización, el ocultamiento de información y, por ende, la elitización de los participantes en el análisis, discusión y definición de los temas curriculares” (Docentes de la BENM, mayo de 2010).

Dos años después, en una nueva carta abierta, la misma comunidad alertó que:

systemáticamente las políticas educativas han visto a la formación de docentes como un elemento subsidiario de la educación básica, propiciando que el modelo de formación se adapte a las características de ésta; en consecuencia, por lo general las reformas a la educación normal se han generado años después de las que se aplican a la educación básica; esto ha propiciado una política de desdén y olvido hacia las escuelas normales. (Declaración de la BENM, 2012)

Según la BENM, el proceso de diseño curricular

ha sido irregular e inconsistente: primero se planteó una propuesta de 4 años, luego se replanteó a 5, para finalmente, y sin explicación lógica alguna ni argumentos académicos, se ajustó nuevamente a 5; la fase de pilotaje se realizó sin contar con programas terminados, bibliografía pertinente, materiales de apoyo ni recursos tecnológicos. (Declaración de la BENM, 2012)

El resultado final fue una reforma que generó más problemas que soluciones. Según una de las más reconocidas autoridades en el tema, el profesor Juan José Rendón,

Calderón anunció la implantación, sin importar las graves contradicciones e indefiniciones que contiene la última versión del nuevo plan de estudios: incongruencia del modelo de formación al reducir a un solo semestre, el último, el periodo de trabajo docente en condiciones reales –debido a que a última hora la carrera tuvo que ser ajustada de cinco a cuatro años como resultado de negociaciones políticas con la cúpula del SNTE–, ausencia

de programas de asignaturas, falta de vigilancia epistemológica y disparidad conceptual en los descriptores de los programas diseñados, y, sobre todo, ausencia total de un programa que considere los apoyos necesarios –presupuestales, de gestión, administrativos, laborales, de equipamiento e infraestructura, de soporte tecnológico, etc.– para garantizar el impacto positivo de la propuesta curricular. (Rendón, 2012)

El cuestionamiento a esta reforma que considera obligatorio el aprendizaje del idioma inglés y del cómputo fue uno de los detonantes centrales de las protestas de los normalistas michoacanos. Además de esta última reforma, las escuelas Normales rurales han sido afectadas en las últimas décadas por otras tres: Primero, la que en 1984 promovió la conversión del nivel de educación Normal básico en licenciatura. Segundo, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) de 1993, que puso en práctica una “descentralización centralizadora” (Observatorio Ciudadano de la Educación, 24 de abril de 1999) y creó un verdadero caos nacional en salarios y prestaciones (Hernández, 2011). El ANMEB “restringió los alcances antes nacionales de las Escuelas Normales Rurales a los límites geográficos de los estados en que están situadas, en cuanto criterio de reclutamiento de alumnos y asignación de plazas al egreso” (Observatorio Ciudadano de la Educación, 29 de febrero de 2004). Tercero, por el Plan de Estudios de 1997, en el que se privilegió unilateralmente el trabajo en el aula y se alejó el aprendizaje del alumno de la práctica, uno de los elementos centrales en el proceso pedagógico de las Normales rurales. El Plan acordó el desarrollo de competencias didácticas para el diseño y organización de estrategias y actividades pedagógicas. Sus contenidos son absolutamente inadecuados para la educación en zonas rurales.

En los hechos, tal y como señala Luis Darío Salas Marín,

los aspectos particulares del currículum [acento agregado] de las [Escuelas Normales Rurales] relacionados con los planes y programas de estudio son ‘desruralizados’ por quienes toman las decisiones de la política educativa nacional desde la década de 1980; aquí entendida la desruralización como la educación rural basada paradójicamente en la vida urbana con referentes de estilos de vida para los jóvenes del medio rural. (Salas, 2009)

Un problema adicional que sufren los egresados de las Normales rurales como resultado de las reformas en

curso es la imposición del concurso para ingresar al servicio docente. Como señala César Navarro, esta medida

significa dismantelar la histórica articulación de las normales públicas con el sistema educativo nacional y la cancelación de la política educativa adoptada por el Estado mexicano para integrar al magisterio a los profesores formados en ellas. Mientras por otra parte se alienta la proliferación de las escuelas normales privadas y se promueve la inserción de sus egresados dentro de la escuela pública y, además, el gobierno habilita como profesores comunitarios-Conafe a muchachos de secundaria para no abrir plazas a los normalistas rurales. (Navarro, 27 de diciembre de 2011)

Ayotzinapa

A las 12 horas del 12 de diciembre de 2011, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa organizaron un bloqueo en la salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco. Pedían una audiencia con el gobernador. La policía lo rompió a balazos. El saldo fue de dos muchachos muertos (Gabriel Echeverría de Jesús, de 20 años, y Jorge Alexis Herrera, de 21), varios heridos graves, otros más desaparecidos y, al menos, 50 detenidos.

Los jóvenes estudiantes campesinos de Ayotzinapa exigían la solución a un pliego petitorio que presentan cada año. Sus demandas eran relativamente sencillas de resolver. Pedían que los 35 pesos diarios por muchacho que se asignan cada día para que realicen las tres comidas, se incrementen. Demandaban que se repararan los baños, los dormitorios y las instalaciones de la escuela, que tienen ocho años sin mantenimiento. Solicitaban que la matrícula anual de 140 alumnos de nuevo ingreso aumente a 170. Exigían que el promedio mínimo aprobatorio para los alumnos que recién entran sea de siete. Solicitaban becas para los egresados.

Por pedir una entrevista con el mandatario Ángel Aguirre Rivero para solucionar estas demandas los balacearon, golpearon, persiguieron, asesinaron, hirieron, detuvieron y torturaron.

El requisito más importante para ingresar a Ayotzinapa es la falta de recursos económicos. Cada año se organiza una selección en que participan tanto las autoridades educativas como los estudiantes. Ellos vigilan que los alumnos de nuevo ingreso sean hijos de campesinos pobres y que sepan trabajar el campo. Cada muchacho que entra a la escuela tiene el consentimiento de la sociedad de alumnos.

En Guerrero hay nueve escuelas Normales públicas. Ayotzinapa es la única rural. En total estudian en ella 520 muchachos, todos de extracción humilde, provenientes de Sierra y Costa Chica de Guerrero, y de comunidades rurales de Chiapas, Puebla, Morelos, Veracruz y Sonora. Fue fundada hace 83 años. Allí comenzaron sus estudios de normalismo Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y Othón Salazar.

El rezago educativo en la entidad es enorme. Según el Censo de Población de 2010, de los 3.4 millones pobladores que tiene Guerrero, 680 mil no están alfabetizados y 1.3 millones no concluyeron la primaria o la secundaria. Es tan grave el problema que el noveno considerando de la Ley Educativa de la entidad reconoce: estamos rezagados en alfabetización, en educación preescolar, en primaria y en secundaria.

Formalmente, durante dos sexenios Guerrero ha estado gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que declara defender la educación pública. Sin embargo, su mandatario hasta 2011, Zeferino Torreblanca, quiso reducir la matrícula escolar de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y acabar con la “alumnocracia” y el desorden que, según él, privaban en la institución escolar. Se negó a dar empleo a alumnos egresados de esa institución porque —dijo— son vándalos.

El gobernador actual, Ángel Aguirre, visitó la escuela en septiembre de 2011; se tomó la foto y se comprometió a resolver las demandas estudiantiles. Allí dijo que el recurso para la dieta, que es utilizado para la elaboración de los alimentos diarios, “hoy se los incrementamos a 50 pesos porque no era posible que comieran con 10 pesos al día” (“En visita a la Normal...”). Pero no cumplió sus promesas y los jóvenes comenzaron a movilizarse nuevamente a comienzos de noviembre. Además de exigir la solución de varios viejos requerimientos, demandaron que resolviera una petición que tenía a la escuela sin clases desde dos meses antes: el nombramiento del director.

Durante semanas, ni el gobierno estatal ni la sección XIV del SNTE lograron destrabar la selección del funcionario, cuyo nombramiento debe llevar las firmas de la titular de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) y del líder estatal del sindicato. Los líderes sindicales del grupo de Elba Esther Gordillo pretendían que se designara a un maestro interno, afín a ellos. Los alumnos no querían a nadie en particular, pero exigían que se emitiera la convocatoria y se escogiera a alguien que no formara parte de la planta docente.

El 9 de noviembre de 2011, Marcial Rodríguez Saldaña, subsecretario de Educación Media y Superior, aseguró a los alumnos que la convocatoria para nombrar director ya estaba lista y que sólo faltaba la firma de la secretaria de

Educación estatal, Silvia Romero. La convocatoria nunca fue emitida (Cano, 21 de diciembre de 2011).

Cansados de que no se les hiciera caso, preocupados por el riesgo de que se perdiera el semestre, casi un mes después de esa reunión los normalistas *tomaron* la carretera, como han hecho tantos otros grupos sociales a los que el gobierno no escucha. Como respuesta fueron baleados. El SNTE dilató tres largos días en criticar la agresión contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Finalmente lo hizo en un desplegado público sobre los acontecimientos, en el que guardó silencio sobre su responsabilidad en el conflicto.

La hostilidad hacia los normalistas rurales es compartida por una buena parte de la clase política local. Emiliano Díaz Román, secretario general de la sección XIV del SNTE, aseguró que:

Los 42 docentes de Ayotzinapa son institucionales y enfrentan constantes jalones con los estudiantes porque los jóvenes, en cuanto ingresan a la normal, se apropian de las historias de que por ahí pasaron Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, de historias de compañeros que han tenido muy desagradables formas de vida. (Cit. por Cano, 21 de diciembre de 2011: 9)

Carlos Reyes, dirigente estatal del PRD, declaró que su partido no reprime, aunque —según comentaron los memoriosos reporteros locales a Arturo Cano— “en 2007, luego de un violento desalojo de los *ayotzinapos*, Reyes los recibía con esta frase: ‘Se merecen eso y más’ ” (Cano, 16 de diciembre de 2011: 16).

La ejecución extrajudicial de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría dio visibilidad nacional al conflicto de Ayotzinapa. El asunto saltó a las primeras planas de los diarios nacionales y provocó la intervención de organismos de derechos humanos en todo el país. Jóvenes alumnos de la FECSM se movilaron en las entidades donde estudian.

El 2 de marzo de 2012, la CNDH, en uso de una nueva facultad constitucional que la habilita para conducir investigaciones especiales por graves violaciones a derechos humanos, emitió la Recomendación 1 VG/2012, sobre la investigación especial que realizó por las agresiones contra los normalistas de Ayotzinapa. Se trata de la primera recomendación de esta naturaleza que emite la CNDH, en uso de la nueva facultad.

El informe reconoce la legitimidad de la protesta realizada el 12 de diciembre de 2011 y considera plenamente acreditada la existencia de las violaciones graves a derechos humanos, imputables a autoridades federales y estatales como

criminalización de la protesta social; también el uso irracional de la fuerza y el empleo excesivo de las armas de fuego; la ejecución extrajudicial de dos muchachos; la tortura de otro estudiante; las lesiones por disparo de arma de fuego infligidas a tres más; los tratos crueles y detenciones arbitrarias que se cometieron en contra de otros normalistas y personas ajenas al conflicto; y la inadecuada atención a las víctimas.

El informe admite que en la Normal rural se vivía en condiciones indignas que limitaban a los estudiantes el acceso a una educación de calidad, así como los derechos a una vivienda digna y a la salud, situación que fue desatendida por negligencia gubernamental y que propició las protestas.

La CNDH concluyó que hubo “responsabilidad institucional” del gobierno del estado de Guerrero por la indolencia y la intolerancia con que se condujo la interlocución política con los estudiantes antes del 12 de diciembre de 2011. Asimismo, responsabiliza a la Policía Federal de ser los primeros en disparar, y establece que los estudiantes detenidos por esa corporación fueron llevados a un cuartel policial donde fueron víctimas de tratos crueles.

El informe fija la responsabilidad política y jurídica en los hechos de los más altos funcionarios del estado de Guerrero conforme a la cadena de mando, ordenando al Congreso estatal que se siga juicio político en contra de quienes entonces fungieron como Procurador de Justicia, Secretario de Seguridad Pública y Subsecretario de Seguridad Pública, respectivamente, sin menoscabo del proceso que se sigue en contra de los policías ministeriales identificados como autores materiales del homicidio de los jóvenes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Casi un año más tarde, los jóvenes normalistas siguen esperando justicia. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” denunció el incumplimiento gubernamental de las recomendaciones de la CNDH y la falta de garantías de que los ex funcionarios estatales sean llevados a juicio político (Torres, 25 de octubre de 2012).

El michoacanazo

Michoacán vivió en 2012 lo que Oaxaca experimentó en 2006. Hace poco más de seis años, en la tierra de Benito Juárez, el gobernador Ulises Ruiz ordenó reprimir a los maestros democráticos de la sección 22 e incendió el estado. La madrugada del 15 de octubre, el gobierno de Michoacán precipitó el desbordamiento popular cuando policías federales y estatales golpearon salvajemente y detuvieron a 176 estudiantes normalistas rurales de Tiripetío, Cherán y Arteaga.

Los jóvenes exigían el diálogo con el gobernador para presentar una propuesta de mejora educativa de las Normales del estado, suspender la imposición de un plan de estudios que no fue consultado con la comunidad y ampliar las plazas docentes. Nunca tuvieron respuesta real de las autoridades. Por el contrario, el gobernador Fausto Vallejo dijo que no iba a negociar bajo presión.

Desde dos meses antes las Normales de la entidad comenzaron a efectuar paros. Los primeros días de octubre, para forzar el diálogo, retuvieron autobuses y los resguardaron en las instalaciones escolares, práctica usual entre los movimientos sociales en el estado desde hace mucho tiempo.

Existen en el estado de Michoacán ocho Normales: Escuela Normal de Educadoras (ENE), Escuela Normal Superior de Michoacán (ENSM), Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM), Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetío (ENRVQ), Escuela Normal de Educación Física (ENEF), Centro Regional de Educación Normal de Arteaga Michoacán (CRENAM), Escuela Normal Urbana Federal (ENUF) y Centro Regional de Educación Normal (CREN). Todas ellas se agrupan en la Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán (ONOEM), que defiende los derechos de los estudiantes y a la educación pública.

La ONOEM rechaza la reforma curricular en las escuelas Normales. Esta reforma pretende, entre otras cosas, cambiar de tres a cuatro años el periodo curricular, así como el aprendizaje obligatorio del idioma inglés y tecnologías de la información. Los estudiantes en lucha sostienen que no se debe homogeneizar el sistema educativo, sino adecuarlo a las características de cada región. Objetan que en una entidad con una importante población indígena, como es Michoacán, se deje de lado la enseñanza de las lenguas de las poblaciones originales requerida para impartir una educación de calidad, para privilegiar el estudio del inglés.

Según la organización, en la reconstrucción del plan de estudios 2012 no se tomaron en cuenta las características particulares del estado de Michoacán y se dejaron desprotegidas a las Normales con perfil intercultural bilingüe, lo cual atenta contra la identidad normalista.

La ONOEM considera que la reforma es una imposición más de política económica y laboral, con cuya aplicación se pretende formar técnicos superiores de educación básica, lo cual es contrario al proceso de crecimiento y desarrollo de la entidad. Piensa, además, que su implementación significa un retroceso en la formación inicial de educadores populares con perfil pedagógico, psicológico, epistemológico, ético, filosófico y político que necesita la niñez michoacana (ONOEM, 2012).

La ONOEM se propone:

construir un currículum alternativo retomando las líneas críticas para la formación inicial de maestros, en congruencia con nuestro ideario histórico legado por la Revolución Mexicana al servicio del pueblo, ocupando nuestros espacios áulicos, escolares y públicos para seguir refrendando la formación de educadores comprometidos con la transformación social en la lucha contra la opresión y la injusticia. (ONOEM, 2012)

El rechazo a la reforma nace, también, del choque con la experiencia de los normalistas en comunidades en donde los niños van a la escuela sin zapatos y sin probar bocado, donde las escuelas no cuentan con pisos de cemento, ni agua potable, ni drenaje, ni electricidad, mucho menos con acceso a Internet o computadoras.

Su oposición a privilegiar el aprendizaje de tecnologías de la información no es un rechazo a la “modernización”. Como muchísimos otros jóvenes en el país, los michoacanos saben usar ordenadores y poseen conocimientos de informática suficientes para enfrentarse a los retos de la vida moderna. Pero en las zonas rurales donde van a trabajar al concluir sus estudios no hay condiciones para utilizar esas tecnologías.

Advierten también que existe la tendencia creciente de las autoridades educativas a desprofesionalizar la actividad docente, convirtiendo a los maestros ya no en profesores que imparten clases, sino en técnicos educativos que limitan su actividad a prender, manipular y apagar televisiones o computadoras, en las que los alumnos acceden a los contenidos pedagógicos.

Los normalistas, como señala el alumno de Tiripetío, Camilo Ceja Durán, tienen interés en aprender la cultura viva de los pueblos indígenas. Señala a la revista digital *Desinformémonos*:

Sí me gustaría aprender el purhépecha. El plan de estudios maneja educación artística y las culturas, pero más que nada como historia que ya pasó y no debemos retomar. Nosotros lo que queremos es recuperarlo, porque ¿qué es lo que está haciendo el sistema? Pues implementar otras culturas que no conocemos y no tienen una identidad. (Cit. por Chávez, 2012)

La respuesta popular a la represión estudiantil fue impresionante. Miles de maestros democráticos de la sección XVIII tomaron Morelia en una movilización no vista

en años, tanto por su fuerza como por su tamaño. Muchas comunidades indígenas de la meseta purhépecha expresaron su solidaridad con los jóvenes detenidos. Los vecinos de Tiripetío cubrieron las ventanas y zaguanes de sus casas y los postes y vehículos, con cartulinas, hojas, *post-it*, con frases en apoyo a los estudiantes, comunicando una idea central: la indignación del pueblo todo por la barbarie de los federales y estatales en contra de los normalistas. La protesta se sostuvo ininterrumpidamente en toda la entidad durante varios días.

Simultáneamente, un aire de indignación sacudió a maestros, normalistas y estudiantes en otras entidades. A pesar de la campaña en medios de comunicación en contra de los detenidos, las protestas se extendieron por diversos estados. En la ciudad de México, colectivos estudiantiles bloquearon la avenida de los Insurgentes y ocuparon las oficinas de la representación del gobierno de Michoacán. En Morelos, Guanajuato, Oaxaca, Chihuahua y Nuevo León se efectuaron manifestaciones y *tomas* de casetas.

La represión del gobierno de Fausto Vallejo a los normalistas fue la gota que derramó el vaso del descontento social en la entidad y un catalizador del descontento que existe entre sectores de la población en todo el país. El choque no es nuevo. Desde que el mandatario local tomó posesión del cargo, en febrero de este año, la confrontación se ha exacerbado. Su determinación de romper con el pacto social informal existente en el estado a lo largo de la última década, y cerrar las vías de negociación a los movimientos populares, ha generado enorme descontento. Muchos de esos conflictos existían desde antes de su llegada, pero hace nueve meses comenzaron a crecer.

La lista de problemas pendientes de solución en Michoacán es enorme: la Universidad Nicolaíta, los Conalep, los municipios de Salvador Escalante y Aquila, la comunidad indígena de Capácuaro, de Urapicho y Cherán, son sólo algunos casos. El descontento social y las confrontaciones con el poder en Michoacán tienen tras de sí una larga y cruenta historia. Tan sólo entre 1988 y 1990 fueron asesinados en la entidad 250 dirigentes populares o neocardenistas que luchaban por la democracia. El estado se transformó al calor de las luchas del neocardenismo y los movimientos sociales. El proceso comenzó aun antes de la llegada de Lázaro Cárdenas Batel a la gubernatura, en 2002. Los maestros democráticos de la sección XVIII desempeñaron un papel central, ya sea a través de sus propias luchas o como mediadores entre distintos grupos sociales y el gobierno estatal.

Al igual que sucede con el magisterio oaxaqueño y chiapaneco, los maestros michoacanos agrupados en

la Sección XVIII del SNTE desempeñan un papel fundamental en funciones de mediación política y social de las comunidades de su entidad. La lucha por democratizar la sección, anterior a la formación de la CNTE, ha caminado de la mano por apropiarse de su materia de trabajo, democratizar la educación y vincularse con las luchas populares.

Los maestros democráticos de la Sección XVIII son, desde hace más de veinte años, la corriente hegemónica entre los trabajadores de la educación en la entidad. Con su movilización han logrado consolidar una representación sindical al margen de Elba Esther Gordillo, respetada y reconocida por los gobiernos en turno.

Muchos de sus dirigentes son egresados de las Normales rurales. Javier Acuña –apodado *El Chino*, una figura clave en la movilización en la entidad, promotor del Movimiento de Liberación Nacional, muerto en un sospechoso accidente de automóvil el 31 de diciembre de 1999– fue egresado de Tiripetío.

Como parte de estos cambios en el gobierno y en la forma de gobernar, las distintas administraciones abrieron espacio a la negociación con las organizaciones populares, a menudo promoviendo su división, la cooptación de algunos de sus dirigentes y la recuperación de su agenda. Desde el gobierno estatal se gestionó la protesta social, fraccionándola y retomando como propio parte de su discurso. Esto no evitó que se produjeran violentas expresiones de malestar, como en el caso de los trabajadores mineros de Lázaro Cárdenas en 2006, los comuneros de Cherán o los mismos normalistas de Tiripetío en 2008 y en marzo de este año, pero facilitó que la entidad pudiera gobernarse.

En el camino, el desencanto con los gobiernos del PRD y la crisis y sobrevivencia de núcleos de la izquierda no institucional en la entidad facilitaron el resurgimiento de organizaciones radicales. La situación cambió con la llegada al poder de Fausto Vallejo. Despidiendo un fuerte tufo porfiriano, recogiendo el sentir de los grupos de poder más retrógrados en la entidad, recuperando lo peor del autoritarismo priísta, sin presupuesto, el nuevo mandatario quiso romper con la cultura y los modos de hacer política locales, se negó a negociar y optó por reprimir a los movimientos sociales que no se sujetan a su visión de lo que debe ser el nuevo orden.

El pasado 15 de octubre, el modelo de restauración autoritaria de Fausto Vallejo explotó. Con el fantasma de lo sucedido en la Normal Rural de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, los estragos de la crisis económica, la inseguridad pública y la acumulación de agravios a cuenta del nuevo gobierno,

la represión a los normalistas provocó el *michoacanazo*. La enfermedad del mandatario y las elecciones para gobernador en 2016 han hecho más difíciles aun las cosas.

La protesta local encontró un clima de solidaridad nacional significativo. Jugaron a su favor las iniciativas de #YoSoy132, la huelga de la UACM, los exitosos paros en el IPN, el descontento en el normalismo nacional y el repunte de la CNTE. En ese clima, el gobierno estatal tuvo que doblar las manos, liberar a los detenidos y posponer la reforma curricular. De no haberlo hecho, muy probablemente el estado se habría incendiado y opacado la toma de posesión de Peña Nieto. El normalismo rural y el movimiento popular en Michoacán se apuntaron un triunfo.

Conclusiones

Abandonadas y con frecuencia atacadas por el gobierno, su terquedad posee aires épicos; su voluntad de persistir se ve reflejada en las dramáticas acciones de sus alumnos, que, con frecuencia, son apoyadas por las comunidades aledañas, asegura Tanalís Padilla (2009) sobre las Normales rurales.

Como lo muestran los dramáticos casos de Ayotzinapa y Michoacán, esta tenacidad se ha convertido en una permanente fuente de conflictos políticos, más allá de la dimensión estrictamente local y educativa en la que se insertan. Conflictos que muestran cómo, por más que se declare muerta a la Revolución Mexicana, una parte de su legado sigue viva entre los sectores más desamparados de la población; que hacen evidentes el papel de aprendiz de brujo desempeñado por la tecnoburocracia empeñada en “reformular” al país desde arriba, menospreciando la historia de los de abajo; que hacen palpables la existencia de un mundo rural que se niega a desaparecer sepultado por la urbanización. Son conflictos que desafían los modos de hacer política tradicional y que indican el grado de descontento que existe en una parte de la sociedad mexicana.

Fuentes

“En visita a la Normal de Ayotzinapa, refrenda Ángel Aguirre su compromiso total con el proceso educativo”. (2011, 27 de septiembre). *La voz de Zihuatanejo*. Recuperado de <<http://www.vozihuatanejo.com.mx/index.php?news=6360>>.

“Las reformas educativas. La educación a los pies de la burguesía”. *¡El Comienzo!* Recuperado de <<http://periodicoelcomienzo.blogspot.mx/>>.

- Arvizu, J. (2012, 19 de enero). "Impera en normales poder de alumnos". *El Universal*. Recuperado de <<http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193179.html>>.
- Avilés, K. & Herrera, C. (2008, 19 de agosto). "Cerrar normales públicas, exige Elba Esther Gordillo a Calderón". *La Jornada*. Recuperado de <<http://www.jornada.unam.mx/2008/08/19/index.php?section=sociedad&article=043n1soc>>.
- Avilés, K. (2011, 23 de junio). "¿Qué haremos con las normales, no patitos, sino monstruos?: Gordillo". *La Jornada*, p. 42.
- Buendía, J. (2012, 14 de marzo). "Ayotzinapa, una deuda más con la justicia". *SubVersiones Agencia Autónoma de Comunicación*. Recuperado de <<http://www.agenciasubversiones.org/?p=2520>>.
- Cano, A. (2011, 16 de diciembre). "Gordillo apoya sólo por interés político, afirman normalistas". *La Jornada*, p. 16.
- Cano, A. (2011, 18 de diciembre). "Mi hijo no era asesino; nomás fue a una escuela de pobres". *La Jornada*, p. 2.
- Cano, A. (2011, 21 de diciembre). "Involucrado en el conflicto de Ayotzinapa, el SNTE tardó 3 días en condenar la represión". *La Jornada*, p. 9.
- Cano, A. & Ocampo, S. (2011, 17 de diciembre). "No hay más culpable que el gobernador: normalistas". *La Jornada*, p. 36.
- Carta abierta a la Maestra Marcela Santillán y a la comunidad académica de las escuelas normales, suscrita por 68 firmas de docentes de la BENM (2012). Recuperado de <<http://delegacionsindicalisceem.blogspot.mx/2010/05/nota-jornada-y-carta-abierta.html>>.
- Chávez, A. (2012, noviembre). "Mientras exista pobreza, las Normales rurales no desaparecerán". *DesInformémonos*, 65. Recuperado de <<http://desinformemonos.org/2012/10/mientras-exista-pobreza-las-normales-rurales-no-desapareceran/>>.
- Declaración de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en relación con la reforma curricular de la educación normal (2012, 30 de octubre). Recuperado de <http://www.facebook.com/permalink.php?id=411538472228145&story_fbid=427320583983267>.
- García, I. (2011, 18 de diciembre). "Larga historia de agresiones a normales rurales". *La Jornada*. Recuperado de <<http://www.jornada.unam.mx/2011/12/18/opinion/004a1pol>>.
- Gil, M. (2012, 16 de octubre). "Las escuelas normales en México: diversidad olvidada". *El Universal*. Recuperado de <<http://www.eluniversal.com.mx/estados/88237.html>>.
- Hernández Navarro, L. (2011). *Cero en conducta. Crónicas de la resistencia magisterial*. México: Para Leer en Libertad y Fundación Rosa Luxemburg.
- Herrera, C. & Camacho, C. (2003, 30 de octubre). "Hay una degeneración del normalismo rural". *La Jornada*. Recuperado de <<http://www.jornada.unam.mx/2003/10/30/047n1soc.php?origen=soc-jus.php&fly=1>>.
- Navarro, C. (2011, 27 de diciembre). "Tierra y educación, fundamento de las escuelas rurales". *La Jornada*. Recuperado de <<http://www.jornada.unam.mx/2011/12/27/opinion/014a2pol>>.
- Observatorio Ciudadano de la Educación (1999, 24 de abril). "Comunicado núm. 7". *La Jornada*.
- Observatorio Ciudadano de la Educación (2004, 27 de febrero). "Comunicado núm. 118: Normales Rurales". *La Jornada*, p. 36.
- ONOE (2012). "Pronunciamiento de las Normales de Michoacán ante la reforma curricular". *¡El Comienzo!* Recuperado de <<http://periodicoelcomienzo.blogspot.mx/2012/09/pronunciamiento-de-las-normales-de.html#more>>.
- Padilla, T. (2009, marzo-abril). "Las normales rurales: historia y proyecto de nación". *El Cotidiano*, 24 (154), 85-93. Recuperado de <<http://redalyc.uaemex.mx/pdf/325/32512736009.pdf> <http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/15409.pdf>>.
- Padilla, T. (2012, 28 de enero). "Normales rurales: el eterno retorno". *La Jornada*. Recuperado de <<http://www.jornada.unam.mx/2012/01/28/opinion/019a1pol>>.
- Poy, L. (2010, 6 de agosto). "Las normales rurales, semillero de guerrilleros, afirma Gordillo". *La Jornada*, p. 35.
- Ramírez, E. (2008, 15 de abril). "Normal de San Marcos en pie de lucha". *Contralínea. Periodismo de investigación*, 6 (100). Recuperado de <<http://www.contralinea.com.mx/archivo/2008/abril2/htm/normal-san-marcos-lucha.htm>>.
- Rendón Esparza, J. J. (2012, junio). "La BENM ante la reforma a la educación normal. Entre la reproducción y la resistencia (Apuntes para la reflexión-acción)". Mecanoescrito.
- Salas Marín, L. D. (2009). "La política educativa del Estado mexicano en relación a la formación inicial del profesorado de las escuelas normales rurales". *Didácticas Específicas*, 4, 77-92.
- Sandoval, E. (2011, mayo). "Maestros sin escuela". *Nexos*, 33 (401), 50-51.
- Torres, B. (2012, 25 de octubre). "Impide perredismo en el Congreso y Gobierno juicio político a ex funcionarios por caso Ayotzinapa; Tlachinollan". *El Diario de Iguala*. Recuperado de <http://www.diariodeiguala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3659:impide-perredismo-en-el-congreso-y-gobierno-juicio-politico-a-ex-funcionarios-por-caso-ayotzinapa-tlachinollan>.